



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

N° 052²⁰¹⁷ -GRJ/GRDS

Huancayo, 31 MAY 2017

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N°337-2017-GRJ/ORAJ de fecha 23 de Mayo del 2017, mediante el cual la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emite conformidad sobre Recurso de Apelación formulado por Héctor Vicente Gómez Gaspar, contra la Resolución Directoral Regional N°276-2017-DRSJ/OEGDRH, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 18 de Octubre del 2016, resuelve rectificar a partir de la fecha los conceptos revisados y analizados de cada una de las normas legales en la Planilla Única de Remuneraciones de la Unidad Ejecutora 408 de la Red Salud Valle del Mantaro, Dirección de Salud Junín, Gobierno Regional Junín, en concordancia con el cuadro denominado: "Revisión y Rectificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de servidores administrativos de la Red Salud Valle del Mantaro"

Que, mediante Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 10 de Marzo del 2017, el Director Regional de Salud Junín, ha resuelto Declarar de Oficio la Nulidad de la Resolución Directoral N°381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 18 de Octubre 2016 emitido por la Red Salud Valle del Mantaro, por haber incurrido en causal prescrita en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444

Que con fecha 17 de abril del 2017 el abog. Hector Vicente Gomez Gaspar, interpone recurso de apelación Contra la Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 10 de Marzo del 2017, indicando se declare subsistente la Resolución Directoral N° 381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 18 de Octubre del 2016 emitida por el Director Ejecutivo de la Red Salud Valle del Mantaro, bajo el argumento de que no se le ha corrido traslado a efectos de que ejerza su derecho a la defensa y que la Resolución Directoral N°381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 18 de Octubre del 2016, ha sido emitido conforme a ley; solicitado que se revoque la resolución materia de apelación y la subsecuente subsistencia de la Resolución Directoral N°381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH.

Que, el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del

GRDS	
REG. N°	2098021
EXP. N°	1391658



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

procedimiento administrativo. Así, *el debido proceso administrativo* supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).

El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional¹. Dicho principio ha sido recogido en la Ley N° 27444 Art. IV del Título Preliminar inc. 1.2. señalando *"Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo."*

Que, asimismo debe tenerse en cuenta que también el superior en grado está en la obligación de pronunciarse de cada uno de los agravios postulados por el apelante en su recurso; precisamente, se postula, que se ha violado el debido procedimiento administrativo, en el sentido de que no se le ha corrido traslado conforme a los indicado por el Inc. 2 del Art. 202 de la Ley N° 27444, asimismo de que la Resolución Directoral N° 381-2016-GRJ-RSVM/URRHH ha sido emitido conforme a ley, e ntre otros argumentos, solicitando que se revoque la Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH y la subsistencia de la Resolución Directoral N°381-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH. Al respecto cabe precisar, que el Art. 217 de la Ley N° 27444 que establece *217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimarás las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.*

217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo." (el énfasis es nuestro).

Que, mediante reporte N° 059-2016-GRJ-DRJ-DRSJ-RSVM/CERPAP, de fecha tres de octubre del 2016, emitido por la Comisión Especial de Revisión del PAP-RSVM, presentado por el Lic. Adm. Walter Cárdenas Sánchez y Victoriano Munarriz Quispe, se ha solicitado y sustentado la rectificación de Planilla única de Remuneraciones de la Unidad Ejecutora 408 de la Red de Salud Valle del Mantaro, Dirección Regional de Salud Junín, en aplicación del Inc. 1 del Art. 184 de la Ley N°25303, la misma que dio lugar al Informe Legal N°87-2016-GRJ-DRSJ-RSVM/OAJ, emitido por la Abog. Ania Melgar Salazar, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red Salud Valle del Mantaro y en consecuencia se emitió la Resolución Directoral N° 381-2016-GRJ-RSVM/URRHH, la misma que mediante

¹ EXP. N.° 03891-2011-PA/TC



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH, se declara su nulidad por los fundamentos en ella expuesta, el cual viene en grado de apelación.

Que, en cuanto al primer agravio postulado por el apelante, de que no se le ha corrido traslado previo a la emisión de la Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH, al respecto debe tenerse en cuenta que el Art. 202 de la Ley N° 27444 si bien es cierto establece **"En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa"**; al margen a la disposición legal, es de tenerse en cuenta que conforme se desprende del petitorio de la apelación el apelante solicita que se revoque la recurrida, lo que implica que está solicitando pronunciamiento de fondo, pese a que cuestiona errores de forma, lo cual habilita al superior emitir pronunciamiento de fondo; al margen de ello debe tenerse en cuenta que la norma se aplica de manera sistemática, dentro de este orden de ideas es de tenerse en cuenta lo señalado en el Art. 217 de la ley N° 27444 antes ya prelada establece que constatado la causal de nulidad la autoridad además de la declaración de nulidad resolverá el tema de fondo, de contarse con los elementos necesarios para ello; en el caso en concreto no se encuentra en juego cuestiones de hechos que pueden ser aportados por el administrado, sino de puro derecho, por lo mismo que se cuenta con todos los elementos necesarios para resolver el fondo de la controversia.

Que, el Art. 1 de la Ley N° 25030 establecía **"La presente Ley establece las normas generales a que se sujetan la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto de los organismos del Sector Público, para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 1991. Incluye asimismo a las empresas estatales de derecho público, de derecho privado y las de economía mixta con participación mayoritaria del Estado."** Por tanto queda claro, que dicha norma solo afectaba el presupuesto para el periodo precisado en la misma norma; si bien es cierto también que la Ley N° 25303 fuera prorrogado para el año fiscal de 1992 en virtud de la Ley N° 25388; empero debe tenerse en cuenta que el Art. 7. I. c de la Ley N° 25572 establecía **"En la ejecución del gasto está prohibido realizar las siguientes acciones y modificaciones presupuestarias....c) Incrementar remuneraciones cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad, excepto las bonificaciones personal y familiar y ascensos a plazas presupuestadas, así como las derivadas de pactos colectivos en el presupuesto correspondiente."** Asimismo, la séptima disposición transitoria y final de la misma ley, establece **"Deróguese o déjese en suspenso, en su caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por el presente Decreto Ley o limiten su aplicación."** Por lo mismo que estaríamos ante un caso de derogación tácita del Art. 184 de la Ley N° 25303, no solo de esta norma, sino de todo el cuerpo normativo; por lo mismo que no podría ser de aplicación en el año 2016 y a la fecha, en razón de lo señalado en el Art. 103 de la Constitución Política que establece **"Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad."** (el subrayado y negrita es nuestro).





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (28411) en su artículo IX del T.P. establece "El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal." Por lo tanto, la bonificación al que hace referencia el Art. 184 de la Ley N° 25303, solo regía para el periodo fiscal de 1991 al 31 de diciembre de 1992 por la prórroga de la ley antes ya explicada, más no puede exigirse su cumplimiento o exigencia de su pago en la actualidad, en base a una norma ya derogada; más aún si tenemos en cuenta que con una norma derogada se trata de afectar el presupuesto del sector público para el año 2016 y 2017, lo cual resulta improcedente.

Que, de lo antes ya advertido, al momento de emitirse la Resolución Directoral N° 381-2016-GRJ-RSVM/URRHH, se ha realizado una aplicación indebida del artículo 184 de la Ley N° 25303, que contraviene el principio de legalidad del acto administrativo, por lo mismo que estamos ante un caso típico de vulneración de la motivación de la resolución conforme a las exigencias del Art. 139 Inc. 5 de la Constitución Política y del Art. 3 Inc. 4 de la Ley N° 27444, por lo tanto se configura la causal de nulidad del acto administrativo previsto en el Inc. 1 del Art. 10 de la misma ley, en los extremos que la Resolución Directoral N° 381-2016-GRJ-RSVM/URRHH contraviene la constitución y la ley, aspectos que han sido recogidos en la resolución materia de apelación, por lo que debe de desestimarse la apelación formulada.

Que, estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Desarrollo Social y contando con las visación de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA el recurso administrativo de apelación presentado por HECTOR VICENTE GOMEZ GASPAS, en contra la Resolución Directoral N° 276-2017-DRSJ/OEGDRH, de fecha 10 de marzo del 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, por agotada la vía administrativa.

ARTICULO TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente administrativo a la Dirección Regional de Salud Junín para mantener un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR copia de la presente resolución al interesado, a la Dirección Regional de Salud Junín y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Abog. Jean A. Díaz Alvarado
Gerente Regional de Desarrollo Social
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

31 MAY 2017
Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL